

EL ORDEN PÚBLICO EN LA CORTE DE FELIPE II⁽¹⁾

Angel Alloza
(Equipo Madrid de Estudios Históricos.
Universidad Autónoma de Madrid)

“O si no la corte, que es la mar que todo lo sorbe, y adonde todo va a parar”⁽²⁾

Y así debió parecer a los miles de personas que en el transcurso de la segunda mitad del siglo XVI se dirigieron a Madrid en busca de una sonrisa de la fortuna. Como no podía ser de otra manera, Mateo Alemán envió allí a su Guzmán de Alfarache: "Con esto determiné pasar adelante (dirá Guzmán), y por entonces a Madrid, que estaba allí la corte, donde todo florecía, con muchos del tusón, muchos grandes, muchos titulados, muchos prelados, muchos caballeros, gente principal, y sobre todo rey mozo recién casado"⁽³⁾. Las últimas décadas del Quinientos debieron suponer una aventura, para unos comercial, vital para otros, en la cual las estrictas normas y bases morales del orden social de la época se vieron constantemente vulneradas. Claro que algunos debieron pagar por ello un precio bien alto.

Existió desorden en el Madrid recién cortesano. Los había que hipotecaban casas que no eran suyas, cirujanos sin título, estafadores profesionales que se hacían llamar mercaderes, abogados que suponían delitos y provocaban pleitos injustos, individuos que fingían ser ministros de justicia sin serlo, jóvenes lacayos que no querían acomodarse a servir si no era por días o semanas, compositores de romances que "faltaban al respeto" a Su Majestad. Pero también se trató de imponer orden, a veces muy estricto por tratarse de ese floreciente Madrid, necesaria fuente de justicia: nuestro popular Lope de Vega "autor de comedias" fue encausado por los alcaldes de corte en 1588 tras componer ciertas sátiras contra unos cómicos⁽⁴⁾. Ese mismo año se vio envuelto en el rapto de una mujer, y se conoce que a su paso por la Real Cárcel de Corte aprovechó para denunciar el hurto de unas comedias suyas por un tal Luis de Bergara. A esas alturas del siglo las autoridades municipales y cortesanas creían que la sociedad madrileña se había desmadrado, por lo que había que "limpiar esta villa de los vicios y pecados públicos que (había) en ella"⁽⁵⁾. Y entonces a nuestro dramaturgo le tocó de nuevo lidiar

con la justicia, esta vez a causa de su amancebamiento con doña Antonia de Trillo en 1596⁽⁶⁾. Se pusieron exigentes los ministros y no quisieron pasar ni una, aunque proviniera de los bajos fondos de la ciudad: a Andrés Moreno, "*padre de la casa pública*", le abrieron causa ese mismo año por cobrar un precio excesivo a las mujeres de ella, así como por otros excesos que no nos permiten conocer⁽⁷⁾. O tal vez demasiado duros: a Juana Bautista, alias la Gayamba de Madrid, que había sido acusada de ladrona y haber quebrantado el destierro, la dieron en 1597 nada menos que 1.400 azotes, eso sí, en siete tandas⁽⁸⁾.

Lo que estaba ocurriendo en esta ciudad de contrastes es que la población de la villa en 1561 rondaba los 20.000 habitantes, mientras que diez años más tarde la cifra se había elevado a 42.000, para acabar la centuria del Quinientos con 90.000⁽⁹⁾. De acuerdo con los especialistas, este espectacular crecimiento demográfico a que sin cálculo alguno aludía Guzmán de Alfarache, fue debido al establecimiento de la corte en la ciudad, que se erigió como un polo de atracción de todas las clases sociales. El auge poblacional de Madrid se vio además compensado por el declive de importantes ciudades y enclaves urbanos del interior de Castilla, como Toledo, Burgos o Valladolid. Sin embargo, la ciudad no estaba todavía preparada para acoger de súbito estos enormes contingentes humanos, y los problemas de abastecimiento de comida y energía, de salud e higiene urbanos, así como de orden público acabarían explotando en las manos de las autoridades municipales y cortesanas, cuyos primeros encuentros se caracterizaron por la disputa de la jurisdicción sobre estas materias tan importantes⁽¹⁰⁾. El sistema de abastecimiento que se trataba de implantar, pieza clave para la subsistencia de los madrileños y garantía de la paz social, se encontraba todavía en sus inicios, por lo que no era capaz de asegurar el aprovisionamiento de los productos básicos de una forma regular. Durante las décadas de 1580 y 1590 se sucedieron los años de penurias en Madrid por falta de provisiones. En junio 1584, por ejemplo, un decreto real mencionaba la gran carestía de pan, debido a la crisis de ese año, y la necesidad que padecieron los pobres, por lo que se exigió adoptar medidas especiales para traer granos de la provincia⁽¹¹⁾. No obstante, los problemas económicos y las epidemias ocasionales se incrementaron durante el periodo en toda la península.

La lucha decidida de las autoridades públicas para erradicar el fraude en la cantidad y calidad de los productos alimenticios, la venta ambulante y la regatería, ofrecen la imagen de un espacio prácticamente inundado de mercados y puestos ilegales. En este contexto, el *pregón general para la buena gobernación de la corte* de 1585 exhortaba al entendimiento de cuestiones básicas para la convivencia ciudadana y el orden público, aunque más que exhortar prohibía la blasfemia, el armamento incorrecto de los cortesanos, el juego, las reyertas y la no sujeción a las normas de la mancebía. También hacía especial hincapié en cuestiones relativas al abastecimiento de productos, la reventa y las normas para bodegones y bodegoneros. En 1591 se insistía en lo mismo, intentando esta vez fijar determinados lugares para cada actividad, aunque erradicando la invasión del espacio público por cocinas, tiendas móviles o las mismas cuadrillas de trabajadores de la construcción⁽¹²⁾.

Al calor de este creciente hervidero humano se arrimaban todos aquellos que se sentían atraídos por él, y que a menudo habían sido "expulsados" de sus lugares de origen,

ya a consecuencia de la pobreza, ya por deudas, por la falta de expectativas, o lo más probable: debido a un cóctel de todo ello. El flujo de población a la capital causó inquietud entre las autoridades municipales y cortesanas, y el propio rey se lamentaba por la invasión de inmigrantes en su corte, en especial por la cantidad de pobres que habitaban las calles de la ciudad, aunque similares situaciones se estaban viviendo en todos los territorios bajo su dominio. No en vano, en aquellos momentos se asistía a un debate intelectual de gran altura sobre la forma de asistir a los pobres, centrado entorno a la libertad de movimientos de los necesitados por un lado, frente a la regulación y centralización de la asistencia pública bajo control del poder civil por el otro, el cual acabaría determinando la política de Felipe II para con los menesterosos. A pesar de la situación general y particular de Madrid, los proyectos de Pérez de Herrera, al margen de la publicación de su obra *Amparo de Pobres*, jamás llegaron a materializarse de un forma plena ⁽¹³⁾.

Tras el establecimiento de la corte en Madrid, la Sala de alcaldes, una institución policial y judicial muy bien organizada y eficaz para la época, se hizo cargo -junto a las instancias municipales- del mantenimiento del orden público en la ciudad. A pesar de lo cual, el delito se extendió a una velocidad de vértigo, como muestran los registros policiales. No es casualidad por tanto que en estas fechas Madrid se perfilara como una de las mayores ciudades exportadoras de galeotes de Castilla, ya sólo superada por algunas de la región andaluza como Écija, Jerez de la Frontera, Utrera, Málaga, Córdoba, Sevilla y otras ⁽¹⁴⁾. El propio Felipe II volvería a lamentarse por tal situación, animando y exigiendo al mismo tiempo la formación de rondas nocturnas para la vigilancia del espacio cortesano, como él mismo había visto se hacía en Inglaterra y tan buen efecto causaba... ⁽¹⁵⁾.

No se trata de sobredimensionar los índices de delincuencia obtenidos a partir de los Inventarios de causas que elaboró la Sala de alcaldes en Madrid, en primer lugar porque estas listas ofrecen todo tipo de casos "criminales": desde serios delitos contra la vida o propiedad, hasta leves contravenciones a las pragmáticas o a las reglas de policía urbana; en segundo lugar porque las series estadísticas proporcionan el número de causas abiertas y de reos implicados en ellas, pero sabemos que no todos los encausados fueron finalmente penados por la justicia ⁽¹⁶⁾. Sin embargo, y a pesar de ello, lo cierto es que esa ciudad que Mateo Alemán caracterizara como "patria común, dehesa franca, nudo ciego, campo abierto, globo sin fin, madre de huérfanos, y capa de pecadores" ⁽¹⁷⁾ ya no sería Sevilla por más tiempo, sino Madrid. Y existen muy pocas dudas de que a finales del Quinientos la segunda arrebató la reputación de "Babilonia castellana" a la primera.

Desvelar lo que ha ocurrido para que la corte de Felipe II se hiciera merecedora de tal "galardón" es el objetivo de esta comunicación. Inevitablemente, una de los escasos medios existentes para conocer el estado del orden público en aquella época -o situación de legalidad normal en que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y los ciudadanos las respetan y obedecen sin protesta-, pasa por el estudio de la documentación judicial que ha sobrevivido en los archivos, en particular de la relativa a la delincuencia registrada. Para examinarla con cierto detalle vamos a ofrecer primero unas notas básicas sobre la estructura y funcionamiento del sistema de vigilancia instaurado

en la ciudad cortesana, así como de su administración de justicia, para pasar seguidamente al análisis de la criminalidad que los órganos de control contabilizaron. Si los registros policiales nos ofrecen un indicador real del comportamiento criminal en la sociedad madrileña, o por el contrario sólo nos hablan de la actividad de los tribunales de justicia, ofreciéndonos únicamente una imagen de cómo la autoridad percibía el crimen, atendiendo a sus prejuicios morales, asunciones e intereses, constituye una materia muy interesante a la que vamos a tratar de dar respuesta en las conclusiones finales.

I

En la época moderna las ciudades castellanas no disponían de un sistema específico orientado a la prevención del crimen. En general, las medidas preventivas eran escasas y se centraban básicamente en dos vertientes: la disuasión de los delincuentes mediante la acción penal de la justicia, y la vigilancia de algunas ciudades importantes a partir de un sistema de rondas nocturnas. La corte, como residencia del rey, siempre fue objeto de una atención especial. En la época de Felipe II había en Madrid dos instituciones encargadas del mantenimiento del orden público y la represión de la delincuencia: la Sala de alcaldes de Casa y Corte, y el Corregidor y sus tenientes. Éste último representaba al rey en el ayuntamiento y tenía jurisdicción en materia civil y criminal; era por tanto la principal autoridad del municipio madrileño. La Sala de alcaldes constituía una institución real que tenía asignadas ciertas tareas de gobierno en el espacio cortesano, como el abastecimiento, regulación de precios, policía y su ornato, además de la jurisdicción civil y criminal en la corte y su "rastro"; un territorio que se extendía cinco leguas alrededor del sitio donde se estableciese la residencia regia ⁽¹⁸⁾.

Además de las puertas y accesos a la ciudad, objeto de control especial en años de epidemias y peste, durante el reinado de Felipe II el espacio madrileño fue dividido en cuatro cuarteles o "estaciones", cuyo objeto era facilitar al alcalde y alguaciles sus tareas de control, materializadas a partir de un sistema de rondas nocturnas -y la debida vigilancia diurna-, durante las cuales se llevaban a cabo las averiguaciones y pesquisas pertinentes para la resolución de los crímenes en ellos perpetrados. La primera estación o cuartel se extendía por los lugares de Palacio, Santa María, San Nicolás, Santiago, San Gil, Santo Domingo y Convalecientes; la segunda por la Calle Nueva de Segovia, San Pedro y San Andrés, Rastro de madera y San Francisco; la tercera por Plaza Mayor, Santa Cruz, San Sebastián, Trinidad, Merced, Concepción Jerónima y Teatinos; y la cuarta por Prado de San Jerónimo, Las Vallecas, San Luis, Las Descalzas, y San Ginés⁽¹⁹⁾. Por medio de la misma pragmática de 1583 que establecía la distribución del espacio urbano en cuarteles, se hizo aumentar el número de alcaldes de corte de cuatro a seis, asignando dos nuevos alguaciles a cada uno de ellos ⁽²⁰⁾. En total, al final de la década de 1580, entre los alguaciles y porteros de la Sala, los alcaldes de corte, los dos tenientes de corregidor y demás oficiales del juzgado municipal, el personal encargado de la vigilancia y prevención del crimen en Madrid podía aproximarse en número casi a la centena de efectivos.

La capacidad de anonimato que ofrecía esta ciudad requirió nuevos y más eficaces mecanismos de control, y las rondas nocturnas acabaron por convertirse en la pieza

clave para la vigilancia de la ciudad. "Allí al fin, está cada uno como más le viene a cuento: nadie se conoce, ni aun los que viven de unas puertas adentro. Esto me arrastró y allá me fui" reconocía el pícaro protagonista de este texto ⁽²¹⁾. Las rondas eran formadas tanto por los alcaldes de corte y sus alguaciles como por los tenientes de corregidor y sus oficiales. El modo de organizar las patrullas, las visitas a los cuarteles, hospitales, burdeles y la Real Cárcel de Corte, así como las relaciones entre el Teniente de la villa y la Sala y demás eventos de especial interés para el gobierno y policía de la corte y su rastro, como el modo de actuar en los casos de crisis de subsistencias o graves alborotos en los pueblos de alrededor, está desarrollado en dos libros de especial significado; *Advertencias para el ejercicio de la plaza de alcalde de Casa y Corte y el Libro de noticias de la Sala, desde 1601 hasta 1743* ⁽²²⁾.

Por su estructura, funcionamiento y capacidad, la Sala de alcaldes se instituyó, por encima de los tenientes de corregidor, como la principal institución para el mantenimiento del orden en la ciudad. Su actividad clave se concretaba en la administración de justicia, al ejercer una "absoluta y suprema jurisdicción, sin apelación ni súplica de sus sentencias si no era ante ella misma" ⁽²³⁾. De hecho, todas las causas criminales de la ciudad debían pasar por el tribunal de los alcaldes en grado de apelación -si es que había lugar a ella- o simplemente para que las sentencias dictadas en el juzgado municipal fuesen confirmadas por la Sala. Los tenientes ni siquiera podían dar tormento o ejecutar penas corporales sin consultar primero a los alcaldes de corte ⁽²⁴⁾. La Sala, en consecuencia, tenía competencias plenas en lo tocante a la policía de la ciudad, y ejecutaba sus propias sentencias, si bien, para ejecutar la pena de muerte era preceptivo el informe del rey y su confirmación. De esta potestad máxima sólo quedaban exceptuadas las personas que podían ampararse en otra jurisdicción distinta a la ejercida por la justicia real ordinaria, como las privativas de Hermandades, Fuero militar, Eclesiástica, Mesta, Fuero universitario, Nobles, Hacienda, Consulados mercantiles, Diplomáticos o Reales Sitios ⁽²⁵⁾.

Todo lo que acontecía desde que se tenía noticia de la comisión de un delito, hasta las últimas consecuencias para el reo -aprehendido o en ausencia- que lo cometió, forma parte de un proceso que no sólo define a la administración de justicia, sino también a la sociedad que la hace posible. Sobrepasa por tanto los límites de este estudio describir siquiera brevemente sus rasgos principales ⁽²⁶⁾, si bien, es muy difícil pasar adelante en nuestro análisis de la delincuencia sin mencionar varios aspectos determinantes que han sido tratados con más o menos acierto por los historiadores del derecho, más centrados en el estudio de la ley -como es lógico- que de su aplicación real. Las propias nociones de delito, de derecho penal y procesal o de justicia y policía adquieren dimensiones distintas cuando se refieren a la edad moderna.

Salvo contadas excepciones, los trabajos dedicados al estudio del sistema penal castellano en las Edades Media y Moderna han consagrado la imagen de una justicia implacable, que apoyándose en la indefensión de los reos condenaba de ordinario a quienes caían en sus garras. Según los especialistas, esta tendencia obedecía al hecho de que los ministros de justicia cobraban en función de las costas procesales, y por consiguiente del número de condenas que impusieran; de modo que el afán por castigar a los reos no derivaba tanto de la preocupación de los jueces por la seguridad pública,

cuanto de su propio interés económico ⁽²⁷⁾. El profesor Tomás y Valiente explicitaba este punto con la agudeza intelectual que siempre le caracterizó:

"El proceso penal se muestra como una sorda lucha entre oficiales y jueces por una parte, y los reos por otra. Unos y otros esgrimían un extenso repertorio de armas vagamente fundadas en la ley, pero de comprobada eficacia práctica. Quien más podía, vencía. Lo de menos en muchísimos casos era el esclarecimiento de la verdad ... lo decisivo era el interés egoísta de jueces y escribanos" ⁽²⁸⁾.

Se ha afirmado que el sistema penal del Antiguo Régimen tenía como mayor objetivo la represión de los delitos que la impartición de justicia, y que su modo procesal, en especial el desarrollado en la Sala de alcaldes, se caracterizaba por la falta de imparcialidad de los jueces, la orientación del sistema de pruebas en pos de la condena de los reos y no de su absolución, así como por la inferioridad procesal de éstos ⁽²⁹⁾. De nuevo, Tomás y Valiente aseguraba que en aquella época caer en las redes de la justicia era una auténtica desgracia, que comportaba graves consecuencias difícilmente evitables, se fuese o no culpable ⁽³⁰⁾. La corrupción a que daba lugar la venalidad de los cargos subalternos de la justicia, y el mismo sistema de retribución de todos sus oficiales son de sobra conocidos. "Librete Dios de juez con leyes de encaje y escribano enemigo y de cualquier dellos cohechado" advertía Mateo Alemán a finales del siglo XVI, quien para no comprometerse en exceso en su repudio a los jueces, clamaba entre interrogaciones su queja: "¿quien ha de creer haya en el mundo juez tan malo, descompuesto ni desvergonzado, que tal sería el que tal hiciese, que rompa la ley, y le doble la vara un monte de oro?" ⁽³¹⁾.

Es incuestionable que el sistema penal sirvió para reprimir delitos y se erigió como un importante instrumento de control y poder en manos de la clase dirigente. De hecho, la imagen de una justicia temerosa incluso para los ciudadanos inocentes de todo cargo ha permanecido en el substrato cultural de los castellanos, y ha sido reiteradamente reflejada en la literatura ⁽³²⁾. Sin embargo, de acuerdo con recientes investigaciones sobre la delincuencia y penalidad en la España moderna, parece que la justicia penal fue menos arbitraria y temerosa que la representada en estos textos, y que atribuía más garantías procesales a los reos de las que se les suponían. Además, a pesar del alto grado de corrupción entre los oficiales de justicia, con cierta frecuencia cayó sobre ellos el peso de la ley. Esto es particularmente cierto en el caso concreto de los alcaldes de corte, cuya reputación y prestigio estaba fuera de toda duda. Por otro lado, el hecho de que la capacidad de arbitrio en manos del juez constituyera un elemento innegable del proceso penal del Antiguo Régimen, no desacreditaba el sistema judicial que lo sustentaba, porque, de acuerdo con Benito Jerónimo Feijóo, la voz arbitrio no significa disposición pendiente del afecto, sino pautada por la razón y el juicio. Esta significación, manifestaba el clérigo del siglo XVIII, era conforme a su origen, pues el verbo latino arbitror, de donde deriva esta voz, significa acto de entendimiento y no de voluntad ⁽³³⁾.

Por último, cabe decir que a pesar del "temor" a la justicia -o tal vez respeto-, los castellanos no huían de ella, antes al contrario, el nivel de "consumo" del sistema judicial, o su nivel de uso por parte de la sociedad del siglo XVI, fue asombrosamente alto. De hecho, en términos de justicia civil, Richard Kagan ha calificado a la sociedad castellana de la época moderna como una "sociedad pleiteadora" ⁽³⁴⁾; en términos de justi-

cia criminal, sorprende el número de personas que acude ya en el siglo XVI a los tribunales para resolver sus conflictos, incluso domésticos, y elude la venganza personal. Se ha de señalar asimismo que el proceso penal que desarrollaba la Sala de alcaldes se basaba en el principio jurídico *Nulla poena sine lege*, y el formalismo de que hacía gala esta institución pocas veces fue una cuestión de forma y muchas de fondo. Caer en las redes de la justicia no tenía necesariamente que comportar una desgracia. El sistema penal y su procedimiento se desarrollaron esencialmente para perseguir la delincuencia y para proteger a la sociedad, aunque no por ello habría que esperar que en la sociedad de los privilegios, donde los hombres no eran jurídicamente iguales, se impartiera una justicia igualitaria. Esto es impensable en una sociedad que permitía, como permitió al conde de Vinoso en 1586, depositar en la cárcel de corte a un esclavo como fianza tras haber sido acusado de ladrón.⁽³⁵⁾ Cuando Guzmán de Alfarache tiene la pelea con el ventero que le ha dado para comer carne de mulo recién nacido, lamenta su detención de esta forma: "llegáronse algunos regidores y gente honrada de la villa, pusieronlos medio en paz, y asieron de mí. Que siempre quiebra la soga por lo más delgado; el forastero, el pobre, el miserable, de ése asen primero". Ciertamente asieron primero de él, pero al cabo le soltaron cuando se descubrió el entuerto⁽³⁶⁾.

II

Entre 1582 y 1595 la Sala de alcaldes abrió un total de 2.189 causas criminales, que implicaban a 4.349 reos, de los cuales el 18,6 por ciento eran mujeres. La media anual de causas durante el periodo fue de 156,3, mientras que la de reos inscritos fue de 310,6. De cada 310 personas fichadas por la justicia, 253 eran hombres y 57 eran mujeres. El 80 por ciento de los encausados fueron implicados por casos ocurridos en Madrid, el resto provenía principalmente de los pueblos del rastro, aunque un porcentaje muy pequeño de ellos había sido incluido por comisión especial de los alcaldes en las listas de la Sala -se trataba de casos referentes a todo el estado y causas de mayor gravedad e importancia-⁽³⁷⁾. Esta cantidad de casos criminales registrados ofrece ya a finales del siglo XVI tasas que superan los 300 reos por cada 100.000 habitantes. Salvando las diferencias existentes en los sistemas judiciales y la naturaleza de los delitos perseguidos en otros estados europeos, las tasas madrileñas no se daban en ninguna otra capital o ciudad importante del continente, y muy raramente se conocieron en ciudades de la Península Ibérica como Valencia y en menor medida Málaga⁽³⁸⁾.

El primer registro de los Inventarios elaborados por los alcaldes de corte data del año 1542, en el cual se encuentran encausados por comisión especial nueve vecinos de la Villa de Oñate que quitaron y rompieron la vara del alcalde de la hermandad Rodrigo de Alby. Desde esa fecha hasta 1578 la Sala registró casos muy esporádicos; ni siquiera tenemos una mención del asesinato en Madrid de Juan de Escobedo (secretario de Juan de Austria) en marzo de 1578 presumiblemente a manos de alguien vinculado al secretario del rey Antonio Pérez⁽³⁹⁾. En 1579 ya se registraron 10 causas que implicaban a 18 reos, y en 1581 el número de casos inscritos fue de 14, con 24 implicados. A partir de aquel año el número de causas y reos de Madrid comenzó a cobrar su verdadera dimensión, incrementándose hasta 1588, descendiendo luego ligeramente hasta 1593, para después volver a aumentar. A primera vista podría decirse que el cre-

cimiento demográfico constituyó el factor decisivo que produjo semejante aumento de la delincuencia registrada en la corte de Felipe II, pues entre 1580 y finales de siglo la población se elevó de aproximadamente 50.000 habitantes a 90.000. Ciertamente ese factor es ineludible, sin bien, ponderando la cifra de reos con la de población -como se puede apreciar en el gráfico I- se observa que la cantidad de reos encausados por cada 100.000 habitantes superaba ya los 300 a comienzos de la década de 1580, aumentó hasta casi a 500 al final, y acabó el periodo examinado (1595) de nuevo por encima de los 300.

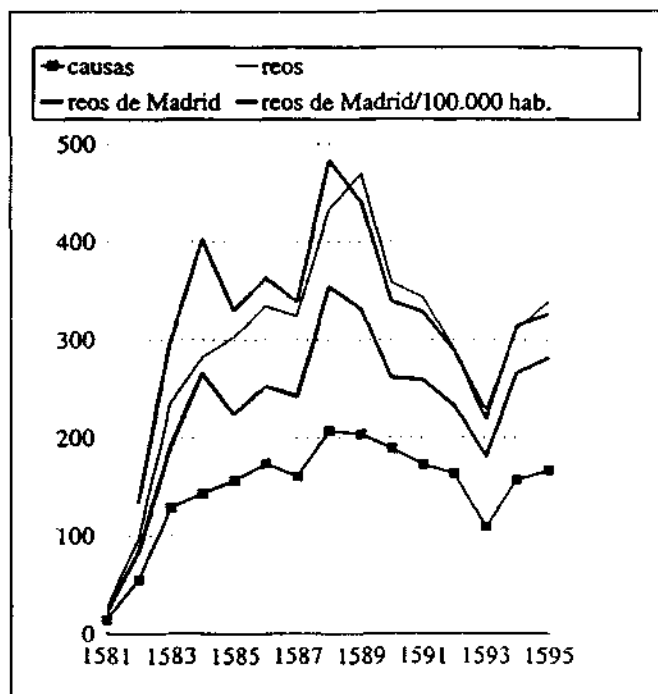


GRÁFICO I

Causas criminales y reos registrados por los alcaldes de corte, 1581-1595.

**Reos encausados en Madrid, por delitos registrados en la ciudad.*

Fuente: elaboración propia a partir de inventarios... Los datos sobre población en V. Pinto y S. Madrazo, Madrid. Atlas histórico, p. 1412. Para elaborar la serie anual de población entre 1571 y 1597 he asumido un crecimiento uniforme entre ambas fechas

Conocer si estas tasas fueron altas o bajas no es posible solamente a partir de ellas mismas, sino también de otras registradas en diferentes periodos y lugares. A pesar de tratarse de un intervalo muy corto para establecer tendencias significativas, no es arriesgado asegurar que a partir de 1582 -si no antes- la corte se vio enfrentada con un serio problema de delincuencia. En este sentido, considerando que durante las tres primeras décadas del siglo XVII el número de causas abiertas en la capital permaneció estable, oscilando entre 150 y 200 al año, y que en aquel periodo la población alcanzó casi 130.000 habitantes (127.000 en 1617), se puede decir que los índices de criminalidad del Madrid de Felipe II se dispararon, pues siendo el número de causas y reos similar al de comienzos del Seiscientos, la población a finales del Quinientos (90.000 habitantes) era mucho menor⁽⁴⁰⁾.

¿Qué tipo de delincuencia se producía en Madrid para que pudiera alcanzar tan elevadas cotas? ¿se trataba de un fenómeno específicamente madrileño y urbano, o por el contrario tenía un alcance más general que se daba en toda Castilla?. La naturaleza del crimen registrado nos ayudará a desvelar estos interrogantes, además de contribuir a explicar su cantidad y evolución. Atendiendo a las diferentes consecuencias para las víctimas de delitos y al objetivo perseguido por los delincuentes en la comisión de sus actos ilegales, pueden distinguirse tres grandes grupos de delitos en las listas de los alcaldes: los que originariamente derivan del *homicidium*, que atentaban contra la vida e integridad física de las personas; los vinculados al *furtum*, cuyos ejecutores pretendían tomar para sí lo ajeno en contra de la voluntad de sus dueños; y los delitos contra el orden y autoridad públicos. Debemos también recurrir a una cuarta categoría que engloba los delitos contra la moral (sexual) dominante, generalmente protagonizados por reos que mantenían relaciones sexuales extramatrimoniales no encaminadas a la procreación.

Los encausados por pendencias, cuchilladas, heridas, homicidios, amenazas, proferir palabras injuriosas y malos tratos son abundantísimas en los Inventarios; los 1.277 reos fichados entre 1581 y 1595 llegan constituir el 40 por ciento de todos los registrados por los alcaldes de corte en la ciudad de Madrid, lo que ofrece una muestra clara del grado de violencia con que se expresaba la sociedad del momento. Salvo en el caso de las causas por palabras injuriosas (ejemplo de violencia oral), el grueso de los implicados en este tipo de delitos lo formaron los hombres, para quienes la defensa de su propiedad y honor, a menudo con las armas en la mano, constituía un principio inexcusable a tener presente cada día. La ley castigaba con la pena de muerte y pérdida de bienes a los sentenciados culpables de asesinato, y aunque este delito era muy difícil de ocultar, resultaba fácil alegar en el juicio que se había producido en legítima defensa, o de forma accidental, y siempre sin intención o dolo. El predominio de casos de homicidio en los expedientes para indulto de Viernes Santo confirma esta situación. También es cierto que las malas condiciones higiénicas y sanitarias en los hospitales no pudieron impedir la muerte de muchos heridos en pendencias y riñas con cuchilladas, como cuando el valenciano Pedro Rodríguez dio muerte en 1593 a Rodrigo Arias en la misma cárcel de Corte ⁽⁴¹⁾. Los casos de puro rigor, brutalidad, crueldad, amenazas y desafíos predominaron asimismo entre los reos del siglo XVI. En 1585 el maestre Pedro fue condenado azotes y galeras por haber matado a un galeote llamado a Francisco Almazán, y cuando el maestre se cortó la mano para no cumplir el duro castigo que le había sido impuesto fue condenado a muerte y posteriormente ahorcado ⁽⁴²⁾. En 1597 seis moros y un "negro capón" de Carabanchel fueron encausados criminalmente bajo la sospecha de haber matado a varios moriscos que querían ser bautizados ⁽⁴³⁾.

Las frecuentes peleas y riñas, a menudo con cuchilladas de por medio, también caracterizaron este Madrid de fin de siglo y sus alrededores. Los casos de malos tratos fueron asimismo frecuentísimos, y probablemente representen tan sólo la punta del iceberg de los conflictos interpersonales en la sociedad madrileña del momento. Casi todos ellos se iniciaban a querrela de parte (o denuncia de la víctima, familiares o vecinos de ella), lo cual habla en favor de la justicia, o de los alcaldes de corte, que en cierta medida acababan convirtiéndose en una especie de árbitros morales de la sociedad.

Aunque con frecuencia este delito fue protagonizado por hombres que maltrataban a sus mujeres, no faltaron los casos de agresiones a curas, a oficiales municipales o de la Sala, a criados, y a todo tipo de personas, con frecuencia por parte de los ministros de justicia. La injuria y difamación, como se ve en el cuadro adjunto, ocasionaron la apertura de un buen número de causas criminales; no podía ser de otro modo en una sociedad donde las apariencias y la reputación constituían todo el capital de los pretendientes y buscavidas. Así al menos nos lo enseña Guzmán de Alfarache cuando aterrizó en Madrid tras su periplo italiano: "Comenzé mi negocio por galas y más galas. Hize los diferentes vestidos de calza entera, muy gallardos... pareciéndome que con aquéllos si comprase un caballo, que quien así me viera y con un par de criados, fácilmente me compraría las joyas que llevaba ⁽⁴⁴⁾."

Tanto como la violencia criminal registrada en la corte, la delincuencia madrileña de finales del Quinientos se caracterizó por el delito contra la propiedad en todas sus formas. No se trataba simplemente de robos y hurtos contra particulares, sino también de todo un elenco de prácticas fraudulentas como el estelionato, la mohatra, el logro o usura, las estafas y falsedades, el alzamiento bienes, así como todo tipo de fraudes en los bienes de consumo de primera necesidad (los alimentos o el carbón, por no mencionar el vino). Por conseguir dinero o bienes se hacía cualquier cosa, desde vender a un hombre libre como esclavo hasta hinchar piezas de carne para luego venderla. La atracción que la corte proporcionaba, junto a la incertidumbre generada por su permanencia en Madrid, dieron ocasión a innumerables prácticas especulativas en el sector inmobiliario de la ciudad, entre las cuales el estelionato, o venta de propiedades con ocultación de las cargas u obligaciones que tuvieran, fue de las más perseguidas. Naturalmente, este último delito era frecuentemente protagonizado por los miembros de las clases altas de la ciudad, como don Alonso de Mendoza, señor de las villas de Cubas y Griñón, quien en 1587 fue encausado por ello ⁽⁴⁵⁾. Por usura, logro y mohatras fueron encausados también unos cuantos individuos, quienes se hacían llamar mercaderes, en el transcurso del periodo que estudiamos ⁽⁴⁶⁾. A estas prácticas especulativas y sin escrúpulos se unía el clásico fraude de las contraescrituras, más complejo pero muy rentable, que no consistía en otra cosa sino en pedir dinero prestado poniendo como garantía unos bienes que mediante una contraescritura pasaban a manos de una persona de confianza del deudor; cuando el acreedor no recibía su dinero en el plazo estipulado e iba a echar mano de ellos, descubría amargamente que éstos ya no existían, que habían volado, pues ya no pertenecían al deudor. Realizar este fraude requería organización y por supuesto la colaboración de escribanos o notarios ⁽⁴⁷⁾.

Vender vino y vinagre adulterado -o aguado-, vender caballos con engaño, peces sin postura, empeñar oro falso, introducir naipes franceses, ejercer de médico sangrador sin tener el título, introducir todo tipo de géneros sin pasar por el registro, vender carbón con arena y de mala calidad y todo tipo de reventas fraudulentas constituían una buena parte de los delitos y contravenciones registrados en los expedientes policiales de Madrid, los cuales nos ofrecen una imagen viva de la picaresca en la ciudad cortesana -debida en gran medida a la necesidad- en contraste con el mundo político y espiritual que se dice reinaba en la opulenta residencia regia. Pero el grueso de los delitos contra la propiedad lo formaban los robos y hurtos, cuyos autores, en conjunto con los de los

fraudes mencionados, sumaban el 34 por ciento de los reos encausados por la justicia madrileña. Doctrinalmente, el derecho penal no distinguía muy bien el robo del hurto, aunque sabemos que la "fuerza" o "quebrantamiento" era la línea divisoria entre ambos⁽⁴⁸⁾. Conocemos la severidad de los castigos impuestos por estos delitos, en especial si se cometían en la corte, porque delinquir en ella multiplicaba gravemente la importancia de la acción, ya que implicaba además del delito en sí una ofensa contra el rey allí presente. Las tradicionales setenas o novenas estipuladas en el Fuero Real (devolución de siete o nueve veces el valor de lo robado), el corte en las orejas si no se disponía de patrimonio, e incluso la muerte en los casos de reincidencia, fueron substituidos por la pena de galeras en tiempos de Felipe II, debido a la necesidad de galeotes para la armada. Esto dio como resultado el que Madrid se convirtiera -como hicimos notar anteriormente- en una de las ciudades que más brazos aportaba a los remos de las naves que por momentos hicieron posible el imperio.

Los méritos de la Monarquía Católica para convertirse en la reserva espiritual de Occidente tuvieron un efecto muy negativo para aquellos que por diversas razones se atrevieron o se vieron abocados a quebrantar las normas elementales de la moral -también católica- del momento, en especial en lo que concernía al sexo extramarital y al propio matrimonio. El once por ciento de los reos envueltos en causas criminales habían sido encausados por amancebamiento, estupro, adulterio, trato ilícito o pecado nefando, pero ninguno por prostitución, al darse la paradoja de permitir esta práctica siempre que estuviera fiscalizada y estuviese debidamente regulada en la mancebía madrileña. El amancebamiento fue el delito dominante dentro de esta categoría, cuya abundancia cabe achacar a la falta de recursos o de una posición estable de los amancebados que les permitiese contraer matrimonio, sobre todo en una ciudad cuya estructura demográfica estaba dominada por población inmigrante joven. Los casos de estupro también fueron abundantísimos, algunos de los cuales se consumaban prometiendo a la joven estuprada "el casamiento". En ocasiones se trataba de una pura farsa mediante la cual las jóvenes, con la colaboración y el ánimo de algunos familiares y relativos, provocaban el estupro con el fin de obtener de su víctima una indemnización, pues ante la imposibilidad de averiguar el delito, bastaba a los alcaldes el testimonio de algunas testigos para sentenciar al acusado, a quien ofrecían generalmente dos posibilidades: o casarse con la muchacha que acababa de perder su honra o indemnizarla con una fuerte suma de dinero. Tratos ilícitos, adulterios y pecados nefandos fueron registrados con menor frecuencia, especialmente el último de ellos porque, como *pecado contra natura*, ponía en entredicho toda la economía de la procreación⁽⁴⁹⁾; y por esa razón se castigaba severísimamente con la pena de muerte en la hoguera y la pérdida de todos los bienes de los reos⁽⁵⁰⁾, lo que no impidió sin embargo que este delito afectase también a las más altas magistraturas del estado: en 1598 el señor don Francisco Sanz, del Consejo de Su Majestad y un tal Juan Beza fueron encausados bajo la sospecha de haber cometido el crimen nefando⁽⁵¹⁾.

Poco sabemos sobre la prostitución en el ámbito criminal, señal de que el control sobre la mancebía madrileña se ejercía de una manera ejemplar. Según los especialistas, su práctica constituía un fenómeno tolerado -como mal menor- para proteger el honor de las familias y limitar la violencia sexual de que eran víctimas las mujeres,

especialmente las solteras y viudas ⁽⁵²⁾. A pesar de que la contrarreforma penalizó la relación sexual extramarital, la actitud de los poderes municipales apenas se vio modificada, al ratificar la prostitución como un verdadero servicio público que había de ser organizado y fiscalizado. Al frente de la mancebía se encontraban una "madre" y un "padre", los cuales hacían de enlace entre ella y las autoridades municipales y cortesanas, al tiempo que se encargaban del cobro de los aranceles fijados por la Sala de alcaldes, cuyo cirujano debía visitar a las *cortesanas* regularmente. Éstas estaban sujetas a una serie de normas relativas a la edad, salud, vestimenta y presencia pública. Si alguien vulneraba las estrictas normas que regulaban esta profesión podía ser de inmediato perseguido judicialmente, como en el caso mencionado del "padre" Andrés Moreno, que en 1596 fue detenido por llevar un excesivo precio a las mujeres de ella, y otros excesos ⁽⁵³⁾. En cambio sí que fueron perseguidos el rufianazgo y la alcahuetería, al estar prohibidos desde la Edad Media ⁽⁵⁴⁾. La tolerancia mostrada hacia la prostitución en las ciudades castellanas, y sobre todo en la corte de Felipe II, contrasta fuertemente con lo acontecido en otras capitales europeas como Londres, donde el fenómeno constituía uno de los sectores de actividad criminal más organizados, razón por la cual en la década de 1570 las autoridades londinenses comenzaron a perseguir no sólo a las prostitutas y rufianes, sino también a sus clientes, porque -con mucha preocupación- habían contabilizado nada menos que 98 burdeles en la ciudad ⁽⁵⁵⁾.

Desde el punto de vista estrictamente criminal, tampoco es demasiado lo que conocemos acerca de los pobres y vagabundos en Madrid. Apenas se registraron reos en los inventarios de causas, y no porque no abundaran, sino porque en el siglo XVI, como se mencionó anteriormente, se llevó a cabo un vivo debate sobre la forma de hacer frente al problema, en cuyo transcurso no se persiguió criminalmente ni la vagancia ni la pobreza. No obstante, apenas hubo cortes en el siglo XVI en que no se tratara del problema de los pobres ⁽⁵⁶⁾. Otros actos contra el orden público como el juego, el quebrantamiento de las penas de destierro, o de cárcel, las resistencias a la autoridad, los escándalos, la contravención a las pragmáticas y reglas de policía, los excesos, la tenencia y/o uso de armas prohibidas motivaron la apertura de numerosas causas criminales, las cuales llegaron a comprender hasta el 15 por ciento del total de los reos implicados en ellas. La reiteración en la prohibición de ciertos juegos de azar desde la Edad Media en adelante, junto a la persecución de los profesionales o "judadores de ventaja", que "cargaban" los dados o marcaban las cartas, no hace sino confirmar que la afición a estas prácticas ilegales era poco menos que universal ⁽⁵⁷⁾.

El quebrantamiento de destierro fue reiteradamente registrado por los alcaldes de corte, con toda probabilidad debido a la facilidad para quebrantarlo, porque el control de los ministros de la Sala se limitaba a la certificación por escrito de la fecha en que el reo salía a cumplir el castigo. En villas, lugares y pequeñas ciudades era muy fácil averiguar si el destierro se hacía efectivo: bastaba con no volver a ver al desterrado durante el periodo prescrito. En Madrid, sin embargo, una ciudad con más de 50.000 habitantes, resultaba ya más difícil, aunque no imposible, como se deduce de las causas abiertas, las cuales fueron posibles gracias al buen funcionamiento del archivo de la Sala.

El establecimiento de la corte en Madrid tuvo unas repercusiones claras en las villas

y lugares alrededor de la ciudad, que se manifestaron también en el ámbito de la criminalidad. A la delincuencia de carácter general que se registraba en estos pueblos se sumaron los conflictos originados por el sistema de abastecimiento impuesto en torno a la corte, así como por la reserva de amplios espacios para cazaderos reales. Por otra parte, salvo en el caso de los delitos violentos -cuyos reos llegaron a formar el 41,7 por ciento del total- y en el de robos y hurtos, la naturaleza del crimen rural difirió -como era de esperar- de la registrada en el ámbito urbano. En los pueblos, los delitos que denominamos contra la moral tan sólo afectaron al 3,2 por ciento de los reos encausados, frente al 11 por 100 de la ciudad, con la diferencia de que el estupro en los primeros fue el más numeroso, mientras que en Madrid lo fue el amancebamiento. La naturaleza de los quebrantos al orden público y la relativa a los de propiedad también fue distinta. Además, debido a la especificidad de las causas y de las consecuencias de determinados actos, ha sido imprescindible agrupar una serie de casos en una nueva categoría que como se verá a continuación bien merece la denominación de "delitos sociales". Me refiero no sólo a los casos de caza furtiva, sino también a los de tala de montes, corte de árboles frutales, descepar viñas y sembrar tierras ajenas, o segar trigo de otros.

Los casos de caza furtiva se sucedieron no sólo en los cazaderos reales del Pardo o Aranjuez, sino también en los bosques del Duque del Infantado. Se dieron asimismo casos de pesca furtiva en los vedados de Mejorada. El problema consistía en que las actividades cinegéticas de unos pocos iban en menoscabo de muchos campesinos, que se veían privados no sólo de la caza sino también del aprovechamiento pleno de sus propiedades. De hecho, nada más instalarse la corte en Madrid se acotó el Real Sitio de El Pardo para la diversión de los reyes, pero al mismo tiempo se señaló una distancia de cinco leguas alrededor de real sitio en la cual se prohibía matar a las reses que saliesen del coto, lo que ocasionaba pérdidas en las cosechas de los campesinos de los pueblos afectados, como Colmenar Viejo, Fuencarral, Alcobendas, San Sebastián, Barajas, etc. En 1579 los vecinos de estos lugares damnificados entregaron un memorial a Felipe II solicitando una compensación por los daños sufridos, los cuales fueron tasados y abonados con regularidad hasta 1598⁽⁵⁸⁾. El aprovechamiento de los bosques, incluyendo la caza y la pesca, resultaba fundamental para las economías campesinas. Los conflictos registrados entre los furtivos y los guardas de los bosques lo muestran claramente: en 1589 se encausó a 11 individuos por cazar en los bosques reales de Aranjuez, con la curiosidad de que estos furtivos iban protegidos con mascarillas para no ser reconocidos por el guarda, quien debía ser excepcionalmente celoso de su trabajo. Tanto es así que este sujeto, llamado Baltasar Panadero, fue encausado en 1595 por la muerte de un hombre llamado Blas de Molina⁽⁵⁹⁾.

El sistema de abastecimiento de trigo a la capital, a partir del sistema de pósitos, establecía la fijación de su precio -a la tasa- por los alcaldes y el propio concejo, si bien en ocasiones los panaderos podían adquirirlo libremente con tal que nunca faltase pan en la ciudad. A menudo, la compra de trigo para el pósito de Madrid la llevaban a cabo los propios corregidores de los pueblos alrededor de la ciudad, quienes alentaban a los jueces a perseguir a los productores que violaban la tasa. De hecho, en la mala coyuntura de los primeros años de la década de 1590 muchos campesinos de Alcalá de Hena-

res, Borox, El Tembleque, etc. fueron encausados por "contravenir la pragmática en el precio de los granos", lo que significaba que estaban vendiéndolo a precios más altos que los estipulados por la autoridad. Algunos de estos regidores-especuladores fueron a su vez perseguidos por dilapidar el caudal (capital) de los ayuntamientos y aun de los pósitos de trigo. Los daños en propiedades, términos municipales, casas, tierras, viñas y sembrados, a menudo ocasionados por el ganado, pero en ocasiones por particulares y con intención, también se registraron en las villas, pueblos y lugares de los alrededores de Madrid. Por tanto, no se puede concluir que, como algunos escritores y novelistas de la época han destacado, el crimen fuese un fenómeno eminentemente urbano ⁽⁶⁰⁾. Existieron diferencias en la naturaleza de los delitos, pero desde el punto de vista cuantitativo es temprano todavía para afirmar la supremacía del crimen urbano sobre el rural.

Hay que destacar finalmente otro foco de delincuencia que afectaba, más que a la sociedad madrileña, a sus autoridades. Me refiero a los numerosos casos delictivos en particular, y de corrupción en general, de los ministros de la justicia, así como de los oficiales reales y municipales de la corte de Felipe II: desde el escalafón más bajo, representado por un simple portero, hasta los más altos, como el secretario del Consejo de Indias, el contador de la ciudad de México o un notario de la Audiencia Arzobispal de Madrid detenido por estafas. Entre 1581 y 1595 fueron encausados 48 oficiales de la administración de justicia en Madrid, y 27 en los pueblos de alrededor ⁽⁶¹⁾. Sus delitos abarcaban desde las cuestiones, excesos y malos tratos hasta asesinatos, pasando por todo tipo de estafas, falsedades y cohechos. En 1587 procurador y fiscal de los presos de la Villa fueron acusados por estafas; ese mismo año el escribano de Daganzo se negó a entregar a un preso y entonces le detuvieron a él. En 1591 el teniente general de las salinas del reino fue procesado por ocultar caudales, al tiempo que su cómplice escribano era acusado de cobrarle excesivos derechos. Aquel mismo año fueron llamados al orden seis hombres, entre ellos alcaldes y regidores de Torrejón, por una fuerte "cuestión" con heridos de por medio.

Mayor sorpresa nos llevamos cuando comprobamos que en su visita a la Real Cárcel de Corte entre septiembre de 1588 y abril de 1589, el licenciado Juan de Tejada se encontró con 112 presos, de los que 27 (24 por ciento) eran oficiales reales y municipales, militares y eclesiásticos ⁽⁶²⁾. De ellos seis eran oficiales reales de la Cárcel de Corte, cuyos delitos o cargos iban más allá de lo anecdótico: cinco habían tenido o permitido relaciones sexuales con las presas o abusado de las visitas femeninas, naturalmente a cambio de favores. También eran cinco los responsables de la fuga de diversos presos o de permitir sus salidas nocturnas y todos ellos, cada uno en la medida de sus posibilidades, habían sido acusados de cobrar en exceso carcelajes, camas, comidas, quitar grillos, o por rifar objetos, permitir y/o jugar a las cartas, sobornar, y a veces -tres de ellos- por propiciar malos tratos a varios presos.

En suma, los inventarios de causas criminales, como un indicador disminuido pero fiable y válido de la delincuencia madrileña, nos han mostrado una ciudad que tras el asentamiento de la corte de Felipe II sufrió altísimos índices de delitos, y en la que el orden público se vio constantemente vulnerado, pese a los esfuerzos de las autoridades municipales y reales para impedirlo. Madrid creció a un ritmo vertiginoso, pero proba-

blemente la ciudad no estaba todavía preparada para acoger a todos cuantos llegaban, ni para garantizar al mismo tiempo la paz y quietud pública. Cuando nuestro protagonista nos recuerda sus impresiones acerca de los cambios que sufrió Madrid desde su pícaro punto de vista, dice: "Entonces éramos pocos (decía Guzmán) y andábamos de vagar; ahora son muchos, y todos tienen en qué ocuparse, y no hay estado (en la ciudad) más dilatado que el de los pícaros, porque todos dan en serlo y se precian de ello". Pero no todo fue negativo, y cuando Guzmán aterrizó por última vez en Madrid observó que "Estaba todo muy trocado de como lo dejé. Ni había especiero ni memoria de él. Hallé poblados los campos, los niños mozos, los mozos hombres, los hombres viejos y los viejos fallecidos. Las plazas calles y calles muy de otra manera, con mucha mejoría en todo."⁽⁶³⁾.

CUADRO I

**Causas criminales y reos registrados en ellas por
La Sala de alcaldes en Madrid y su rastro, 1576-1595.**

año	causas	hombres	reos mujeres	total	reos de Madrid	reos fuera de Madrid
1576	3	3	1	4	2	2
1577						
1578	2	4		4	2	2
1579	10	15	3	18	18	
1580	3	3	1	4	2	2
1581	14	21	4	25	20	5
1582	55	78	20	98	84	14
1583	129	179	56	235	192	43
1584	143	233	49	282	265	17
1585	157	249	54	303	224	79
1586	174	275	59	334	253	81
1587	161	273	51	324	242	82
1588	207	348	84	432	354	78
1589	204	399	71	470	332	138
1590	189	282	76	358	261	97
1591	173	278	65	343	259	84
1592	164	230	61	291	233	58
1593	109	197	32	229	181	48
1594	157	271	40	311	266	45
1595	167	255	84	339	282	57
total	2221	3593	811	4404	3472	932
media perío (1582..1595)						
	156.3	253.3	57.3	310.6	244.8	64.6

Fuente: elaboración propia a partir de Inventario de causas criminales
A.H.N. Consejos, Libro 2.783.

CUADRO II

Número de reos encausados por los alcaldes de corte en la ciudad de Madrid entre 1583 y 1595, según sus delitos.

[illegible]

CUADRO III

Reos encausados por los alcaldes de corte en los pueblos alrededor de Madrid, y fuera de ella por Comisión especial, entre 1581 y 1595, según sus delitos.

	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	1590	1591	1592	1593	1594	1595
Caza furtiva	0	0	6	0	0	0	6	0	17	13	4	0	0	11	0
Tala de montes	0	0	0	0	0	6	0	3	0	2	0	0	0	0	0
Otros "delitos sociales"	0	0	0	0	1	0	3	0	6	0	0	0	0	5	0
Danos en propiedades	4	0	0	0	0	5	5	0	13	0	0	4	14	0	6
Resistencia a la justicia	0	2	0	0	8	0	0	0	19	3	6	0	0	0	0
Quebrantamiento de cárcel	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
Contravenir las pragmáticas en el precio de los granos	0	5	18	0	6	6	1	0	0	0	0	4	0	0	0
Otros fraudes	0	0	0	0	0	0	4	1	0	1	14	0	0	0	4
Robos y hurtos	0	0	0	4	16	14	4	15	7	11	6	3	3	0	7
Falsedades y estafas	0	0	0	1	1	2	0	0	6	3	2	1	1	0	0
Estelionato	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	5
Estupros	0	0	0	0	2	0	2	1	6	1	0	2	0	0	1
Adulterio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0
Anencebamiento	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1
Heridas	0	4	6	4	3	0	0	3	2	14	0	0	0	3	1
Muerte	0	0	1	3	8	18	9	2	17	1	25	9	15	0	9
Malos tratos	0	2	3	0	1	9	0	11	1	0	3	4	0	1	1
Cuestiones	0	0	0	4	15	15	29	21	21	29	11	17	26	14	3
Desafíos y amenazas	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	10
Palabras infamatorias	0	0	1	0	2	2	1	3	10	2	2	1	0	1	0
Libelos	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0	1	0
Moriscos	0	0	0	0	0	0	3	11	0	3	0	0	0	0	0
Otros delitos	1	0	0	1	6	1	1	6	1	8	0	6	4	3	10
Total	6	13	34	17	77	81	76	78	130	93	76	63	63	41	58

Caza furtiva en 1583 incluye tres reos encausados por pescar en los vedados de Mejorada. Otros "delitos sociales" incluye cortar árboles frutales (3 reos en 1587), sembrar tierras ajenas (6 reos en 1589), segar trigo ajeno (1 reo en 1586), desapear viñas ajenas (2 reos en 1594). Danos en propiedades incluye daños en términos municipales, casas, tierras, viñas, sembrados y haciendas, también incluye 2 reos en 1587 por quitar aguas a unas tierras. Quebrantamiento de cárcel incluye quitar o intentar quitar presos. Moriscos, por hablar algarabía.

Fuente: Elaboración propia a partir de Inventarios de causas criminales, A.H.N., Consejos, libro 2.783.

GRÁFICO II

Distribución de los reos de Madrid, 1571-1595.
(según la categoría de sus delitos)

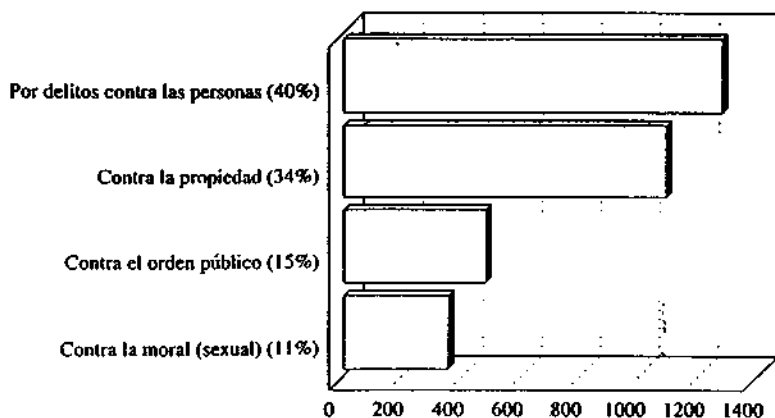
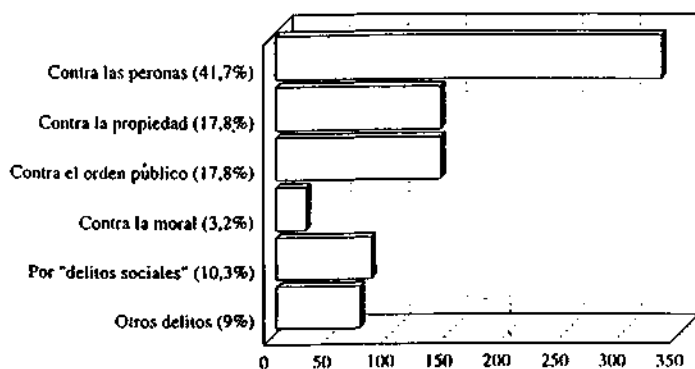


GRÁFICO III

Distribución de los reos de los pueblos alrededor de Madrid, según sus delitos (1581-1595).



Incluye los reos juzgados por comisión especial de los alcaldes fuera del ámbito de Madrid. Delitos sociales incluye todo de monjes, caza furtiva y "otros delitos sociales" referidos en el texto. Los de propiedad incluyen la contravención a las pragmáticas del precio del grano y "asesos lindeños". Los de orden público incluyen los relativos a daños en propiedades, resistencia a la justicia y quebrantamiento de cárcel, de destierro... "Otros delitos" incluye desde libelos hasta azor morisco y hablar algarabía.

NOTAS

- (1) La redacción de este trabajo ha sido posible gracias a la beca F.P.I. (Plan General, postdoctoral en el extranjero) del Ministerio de Educación y Cultura.
- (2) Mateo Alemán, *Vida del pícaro Guzmán de Alfarache*, (edición facsímil, Círculo de Lectores, Barcelona, 1975), p. 28.
- (3) *Ibidem*, p. 48.
- (4) Ver Inventarios de causas criminales, A.H.N., Consejos, libro 2.783, fol. 125.
- (5) La cita proviene de los libros de acuerdos del ayuntamiento. Citado en Alfredo Alvar Ezquerro, *El Nacimiento de una Capital Europea. Madrid entre 1561 y 1606*, (Madrid, 1989), p. 277.
- (6) Inventarios... libro 2.783, fol. 285.
- (7) Inventarios... libro 2.783, fol. 304.
- (8) Inventarios... libro 2.783, fol. 333v.
- (9) Según las estimaciones de los demógrafos para el año 1597. Ver Fina Carbajo Isla, *La población de la villa de Madrid, desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX* (Madrid, 1987).
- (10) Ver José Miguel López García (Dir.) *El Impacto de la Corte en Castilla. Madrid y su Territorio en la Época Moderna* (Madrid, 1998), y V. Pinto y S. Madrazo (Dirs.) *Madrid, Atlas Histórico de la ciudad, siglos IX-XIX* (Barcelona, 1995), especialmente la segunda parte.
- (11) Mencionado en Henry Kamen, *Felipe de España* (6ª edición, Madrid, 1997), p. 312. Similares medidas se adoptaron en la crisis de 1590. Ver Alfredo Alvar, *El Nacimiento de una capital*, pp. 119-125.
- (12) Alfredo Alvar, *El Nacimiento de una Capital*, p. 254.
- (13) El apasionante debate sobre la asistencia pública en el siglo XVI en Linda Martz, *Poverty and Welfare in Habsburg Spain. The Example of Toledo* (Cambridge, 1983), pp. 1-91.
- (14) Véase I.A.A. Thompson, "A Map of Crime in Sixteenth-Century Spain" *Economic History Review*, XXI, 2, (1968), pp. 244-67.
- (15) Kamen, *Felipe de España*, p. 312.
- (16) Recientes investigaciones han demostrado que las diferencias entre el número de reos encausados y el de condenados eran muy amplias. En ocasiones sólo se procesaba a la mitad de los reos que se encausaban. Este fenómeno, muy similar al observado en otras partes de Europa, no se debía a que el nivel de absolución en el proceso penal castellano fuese alto, sino a la falta de evidencias claras y suficientes contra muchos encausados a los que por este motivo nunca se llegó a procesar. Estas diferencias han sido detectadas para el siglo XVIII, si bien, conociendo el funcionamiento de la Sala de alcaldes y sobre todo la estructura y contenidos de los inventarios de causas, es más que probable que similares diferencias se diesen en periodos anteriores. Véase Angel Alloza "La Delincuencia en Madrid durante el Siglo XVIII. Una Historia Social" (Tesis doctoral defendida en la Universidad Autónoma de Madrid en 1996), pp. 289-93. Similares tendencias se han observado en los diferentes estados europeos; para el caso inglés véase por ejemplo John Beattie, *Crime and the Courts in England, 1660-1800* (New Jersey, 1986), pp. 23-48. Para el francés ver Porphyre Petrovitch, "Recherches sur la criminalité à Paris dans la seconde moitié du XVIIIe siècle", en ABBATECCI, et al., *Crimes et criminalité en France sous l'Ancien Régime, 17e-18e Siècles* (Paris, 1971), pp. 187-261.

- ⁽¹⁷⁾ *Guzmán de Alfarache*, pp. 43 y 518 respectivamente.
- ⁽¹⁸⁾ Sobre la Sala de alcaldes puede verse la comunicación presentada en este congreso por José Luis de Pablo Gafas, o su estudio "La Sala de alcaldes de Casa y Corte, 1561-1834" en V. Pinto y S. Madrazo (Dirs.) *Madrid. Atlas Histórico de la ciudad*, pp. 276-81. También puede verse Enrique Villalba Pérez, *La administración de la Justicia Penal en Castilla y en la Corte a comienzos del siglo XVII* (Madrid, 1993); y José Luis de las Heras Santos, *La Justicia Penal de los Austrias en la Corona de Castilla* (Salamanca, 1991), pp. 79-87.
- ⁽¹⁹⁾ Ver José Luis de Pablo Gafas, "Las circunscripciones civiles en la edad moderna, siglos XVI-XIX" en V. Pinto y S. Madrazo (Dirs.) *Madrid, Atlas Histórico de la ciudad*, pp. 126-31.
- ⁽²⁰⁾ Ver Alfredo Alvar *El Nacimiento de una capital*, pp. 115-16; Los cambios efectuados en el sistema de vigilancia a cargo de la Sala de alcaldes en Claudia W. Sieber, *The Invention of a Capital: Philip II and the First Reform of Madrid*, (Michigan, 1986) University Microfilms International, pp. 257-259.
- ⁽²¹⁾ *Guzmán de Alfarache*, p. 518.
- ⁽²²⁾ Ambos son posteriores al periodo que estudiamos, pero recogen el modo de proceder de los alcaldes de corte y demás ministros de la Sala desde el reinado de Felipe II. Su referencia es A.H.N., Consejos, libros 1.420 y 1.421.
- ⁽²³⁾ Sobre la jurisdicción del tribunal de los alcaldes de corte véase A.H.N., Consejo de Castilla, *Catálogo por materias*, p. XVI.
- ⁽²⁴⁾ A.H.N., Consejos, libro 1.420, Cap. 48.
- ⁽²⁵⁾ Sobre lo que puede verse José Luis de las Heras, *La Justicia Penal de los Austrias*.
- ⁽²⁶⁾ He desarrollado esta forma procesal en mi tesis doctoral "La delincuencia en Madrid", pp. 70-103.
- ⁽²⁷⁾ Entre otros trabajos pueden verse los de Francisco Tomás y Valiente, *El derecho penal de la Monarquía absoluta (siglos XVI, XVII y XVIII)* (Madrid, 1969), pp. 199 y ss. y de Paz Alonso Romero, *El Proceso Penal en Castilla, siglos (XIII-XVIII)* (Salamanca, 1982) y "Aproximación al estudio de las penas pecuniarias en Castilla (siglos XIII-XVIII)", *A.H.D.E.*, 45, (1985), pp. 9-94.
- ⁽²⁸⁾ Tomás y Valiente, *El derecho penal de la Monarquía absoluta*, p. 182.
- ⁽²⁹⁾ Paz Alonso Romero, *El proceso penal en Castilla*, pp. 287-304 y Tomás y Valiente, *El derecho penal de la Monarquía absoluta*, pp. 158-304.
- ⁽³⁰⁾ Tomás y Valiente, *El derecho penal*, p. 182.
- ⁽³¹⁾ *Guzmán de Alfarache*, pp. 27 y 28.
- ⁽³²⁾ Como lo muestra este fragmento de Cervantes en una de sus Novelas Ejemplares: "Las once serían de la noche cuando de improviso y sin pensarlo vieron entrar en la posada muchas varas de justicia, y al cabo, el corregidor. Alborotose el huésped, y aun los huéspedes; porque así cuando los cometas cuando se muestran, siempre causan temores de desgracias e infortunios, ni más ni menos la justicia, cuando de repente y en tropel se entra en una casa, sobresalta y atemoriza las conciencias no culpadas" Miguel de Cervantes, "La ilustre fregona", *Novelas Ejemplares*, (sexta edición, Bruguera, Barcelona, 1980), p. 462.
- ⁽³³⁾ Benito Jerónimo Feijóo, *Teatro Crítico Universal* (1924, ed. Facsímil), p. 99.
- ⁽³⁴⁾ Richard L. Kagan, *Pleitos y pleiteantes en Castilla, 1500-1700* (Salamanca, 1991), pp. 31-44.
- ⁽³⁵⁾ A.H.N., Consejos, libro 2.783, año 1586.
- ⁽³⁶⁾ *Guzmán de Alfarache*, p. 71.

- ⁽³⁷⁾ Como procedimientos contra espías, apresamiento de naves, infidencias, conspiraciones, excesos de los soldados en pueblos y ciudades, así como todo lo que al rey pareciera conveniente remitir a sus alcaldes, especialmente cuando estimaba que su presencia, casi directa a través de ellos, era necesaria. Ver A.H.N., Consejo de Castilla, *Catálogo por materias*, pp. XVIII y ss.
- ⁽³⁸⁾ Algunos datos para comparar en el ámbito europeo pueden verse en B. Lenman y G. Parker, "The State, the Community and the Criminal Law in Early Modern Europe", en V. Gatrell, Bruce Lenman y Geoffrey Parker (eds.), *Crime and the law. The social history of crime in Western Europe since 1500* (Londres, 1980), pp. 11-48. Los relativos a la ciudad de Málaga en Francisco Javier Quintana Toret, "De los delitos y las penas. La criminalidad en Málaga y su tierra durante los Siglos de Oro", *STUDIS*, 15, (1989), pp. 245-270. Para el caso valenciano véase Pablo Pérez García, *La Comparsa de los Malhechores*. Valencia 1479-1518 (Valencia, 1990).
- ⁽³⁹⁾ Los Inventarios de causas criminales tal y como los conocemos fueron confeccionados en la segunda mitad del siglo XVIII, por mandato de Andrés Varcárcel Dato, gobernador de la Sala en aquel periodo. Un análisis de esta fuente se encuentra en mi tesis "La delincuencia en Madrid", pp. 268-76.
- ⁽⁴⁰⁾ Los índices de delitos en Madrid a comienzos del siglo XVII en M.C. Martínez Soto "La delincuencia en Madrid. Siglo XVII", Memoria de licenciatura inédita defendida en la Universidad Autónoma de Madrid en 1987; José Luis de las Heras Santos, *La Justicia Penal de los Austrias*. pp. 84-87.
- ⁽⁴¹⁾ A.H.N., Consejos, libro 2.783, fol. 228.
- ⁽⁴²⁾ A.H.N., Consejos, libro 2.783, fol. 55.
- ⁽⁴³⁾ A.H.N., Consejos, libro 2.783, fol. 314.
- ⁽⁴⁴⁾ *Guzmán de Alfarache*. p. 518.
- ⁽⁴⁵⁾ A.H.N., Consejos, libro 2.783, año 1587.
- ⁽⁴⁶⁾ De estos préstamos o adelantos usurarios y especulativos nos da una muestra el mohatrero Guzmán de Alfarache, quien afirma que 200 ducados dados en mohatra llegaban a sumar más de 600 en dos años. Su conciencia le obligaba a abominar de esta práctica, pues no alcanza a entender cómo podría un deudor pagar "lo mucho" cuando ni siquiera pudo hacer frente a "lo poco". *Guzmán de Alfarache*, p. 535. El daño que los censos usurarios y mohatras hacían a los campesinos de los pueblos alrededor de Madrid, y a los de Castilla en general, es puesto de manifiesto por Noël Salomon en *La vida rural castellana en tiempos de Felipe II* (Barcelona, 1982), pp. 251-57.
- ⁽⁴⁷⁾ Un buen ejemplo de estas prácticas, muy difíciles de perseguir judicialmente, tanto en el ámbito de civil como en el criminal, nos lo proporciona Mateo Alemán a través de su *Guzmán de Alfarache*. pp. 525-31.
- ⁽⁴⁸⁾ Ver Gonzalo Rodríguez Mourullo, "La distinción entre robo y hurto en el Derecho Histórico español", *A.H.D.E.*, XXXII, (1962), pp. 25-113.
- ⁽⁴⁹⁾ Sobre este delito en particular y todos los que atentaban contra la moral (sexual) en general puede verse Francisco Tomás y Valiente y otros, *Sexo Barroco y otras transgresiones premodernas* (Madrid, 1990).
- ⁽⁵⁰⁾ En 1598 Felipe II confirma las penas de sus antecesores los Reyes Católicos, y promueve su represión al eliminar la prueba plena necesaria para condenar a un sodomita, bastaría en lo sucesivo el testimonio de tres testigos singulares, o de cuatro aunque fueran partícipes del delito. Nov. Rec. libro XII, título XXX, ley II.

- ⁽⁵¹⁾ Esta causa pasó al archivo secreto de la Sala por mandato de su gobernador el 30 de abril de 1763. A.H.N., Consejos, libro 2.783, fol. 323v.
- ⁽⁵²⁾ Denis Menjot, "Prostitution et Ruffianage dans les villes de Castille a la fin de Moyen Age" *JAHCCJ Bulletin*, 19, (1994), pp. 21-8. Sobre la mancebía madrileña puede verse Enrique Villalba, "Notas sobre la prostitución en Madrid a comienzos del siglo XVII", *A.I.E.M.*, XXXIV, (1994), pp. 505-19.
- ⁽⁵³⁾ A.H.N., Consejos, libro 2.783, fol. 304.
- ⁽⁵⁴⁾ Nov. Rec., libro XII, Título XXVII, Ley I y II.
- ⁽⁵⁵⁾ Ver Ian W. Archer, *The Pursuit of Stability. Social Relations in Elizabethan London* (Cambridge, 1991), pp. 211-15.
- ⁽⁵⁶⁾ Juan Sempere y Guarinos, *Biblioteca Española económico-política* (Madrid, 1801), pp. 61-78.
- ⁽⁵⁷⁾ Nov. Rec. Libro XII, título XXII, ley I, y título XII leyes XIV y XV.
- ⁽⁵⁸⁾ A.H.N., Consejos, leg. 50.147.
- ⁽⁵⁹⁾ A.H.N., Consejos, libro 2.783, año 1589.
- ⁽⁶⁰⁾ I.A.A.Thompson destacó que un hombre nacido en una ciudad de más de 10.000 habitantes tenía cuatro veces más posibilidades de acabar en las galeras que un campesino. Ver I.A.A. Thompson, "A Map of Crime", p. 264.
- ⁽⁶¹⁾ A.H.N., Consejos, libro 2.783.
- ⁽⁶²⁾ Ver Alfredo Alvar Ezquerro, "Algunas noticias sobre la vida diaria en la cárcel de Corte de Madrid: la visita de 1588-1589". *A.I.E.M.*, XXIII, (1986), pp. 309-32.
- ⁽⁶³⁾ *Guzmán de Alfarache*, pp. 168 y 518 respectivamente.